

Pese al auge de la desalinización en Chile frente a la sequía, especialmente, para la gran minería, hoy no existe un marco jurídico-institucional que facilite su desarrollo como industria. A juicio de Daniel Ortega, director líder de Energía y Recursos en Deloitte Chile, esta es una de las tareas pendientes y más urgentes, porque su masificación puede beneficiar a otras industrias y también a comunidades.

“Un ejemplo es que las empresas sanitarias (que regulan su precio mediante el diseño de una empresa modelo), no la puedan incorporar fácilmente en la estructura tarifaria si desean invertir en ella”, precisa Ortega.

Para Tomás Carvacho, gerente de Negocios de VIGAflow, son varios los aspectos que pueden acelerar el uso del agua de mar como alternativa de largo plazo. Uno de ellos es diferenciar la desalación según la escala del proyecto, “teniendo procesos de permisos distintos para pequeñas plantas, por ejemplo menores a 100 l/s de agua producida”. Específicamente para este tipo de iniciativas dice que es importante tener reglamentos y permisos “que sean estrictos en el cumplimiento de normativas técnicas y ambientales”, además de eliminar la necesidad de una concesión

MARCO LEGAL: UN DESAFÍO PENDIENTE PARA POTENCIAR EL USO DEL AGUA DESALADA

En Chile todavía no existe un marco jurídico-institucional para la desalinización. Su ausencia hace que los procesos sean más lentos y que los proyectos demoren más en concretarse.

POR PAULINA SANTIBÁÑEZ T.

marítima, siempre y cuando sean bajo 100 l/s de caudal. Cambiar la tarificación del agua a un mecanismo de precios diferenciados por usuario y tipo de uso es clave, dice Carvacho, para así “fomentar la reducción del sobre

consumo de agua”.

Claudia Monreal, subgerente de Desarrollo CMP, cree que el sistema de evaluación ambiental requiere tener capacidades de control. “Ya es una realidad que puede ser totalmente satelital dado que la tecnología está disponible y que le permitiría a la autoridad intervenir si los proyectos en ejecución salen del flujo permitido. Sin embargo, las aprobaciones están tan blindadas a futuras intervenciones que perdemos mucho tiempo extendiendo el costo y los plazos de las evaluaciones ambientales”, plantea.

La ausencia de un marco legal hace que los procesos sean más

lentos. Pero también la “desinformación transversal” que hay en torno a proyectos de este tipo, dice la ejecutiva, mientras destaca el caso de muchas localidades de la costa que se abastecen a través del programa de Agua

Potable Rural, hoy transformado en Servicios Sanitarios Rurales, a partir del filtro de porciones menores de agua salada. “Esta agua es vital para el desarrollo y la salud de estas comunidades. (...) Hay temas que pueden politizarse y la ciudadanía tiene algo que decir en términos de sus preferencias, pero la necesidad de agua en muchas comunidades costeras es urgente, así como también lo es dejar de usar agua continental en la minería”, comenta.

